

Catalunya

Escuela inclusiva

¿Nos referimos a lo mismo cuando hablamos de la escuela inclusiva? ¿Tienen el mismo nivel de información las administraciones, las patronales, los profesionales y las familias? Seguramente no. No obstante, si se plantearan estas preguntas a los diferentes actores de la comunidad educativa, tendríamos un abanico de respuestas distintas

LA REALIDAD es que, se tenga o no la información y la formación adecuada y suficiente, la escuela inclusiva es un hecho, como lo demuestra el que en Catalunya un elevado número de alumnado con necesidades educativas especiales matriculado estudie en escuelas ordinarias, tanto de infantil y primaria como de secundaria.

Otra cosa son los recursos humanos y materiales necesarios para que la inclusión, además de un hecho, sea un éxito. Aquí las cosas se complican ya que, si en condiciones normales el tema de los recursos siempre es una piedra en el zapato de quien tiene que aportarlos, en unos momentos de crisis se convierte en un obstáculo casi insalvable.

La inclusión también tiene una consecuencia directa que afecta a los centros específicos de educación especial y que últimamente han visto descender su matrícula, hecho que si lo trasladamos al sector de la privada concertada está poniendo en peligro algunos puestos de trabajo ocupados por profesionales con una larga trayectoria y experiencia en el campo de la educación especial que el sistema no puede permitirse perder.

Este hecho trasladado al sector público hará que próximamente algunos de los centros de educación especial pasen a ser, además, centros generadores de recursos educativos para proveer y asesorar a los y las profesionales de los centros ordinarios.

Ante este panorama, en CCOO reclamamos al Departament d'Educació nuestra participación activa a través de la negociación, ya que todo este movimiento y nueva organización afecta directamente a las condiciones sustanciales de trabajo de los colectivos de profesionales del sector público y concertado. Queremos hacerlo desde un solo ámbito de negociación. Entendemos que todos los centros sostenidos con fondos públicos han de ser objeto de los mismos objetivos y tener escuelas inclusivas de calidad con los recursos necesarios y suficientes que ayuden a conseguirlo.

Reclamamos una normativa clara, que obligue por igual al sector público y concertado, la ampliación de los servicios educativos públicos que permitan una atención y asesoramiento adecuados a los centros, un plan de información y formación generalizada a todos los centros y profesionales así como la recolocación de trabajadores y trabajadoras que puedan ver afectados sus puestos de trabajo.